

Desarmando la trampa

29 de Octubre de 2012



La semana pasada informamos que el Ministerio de Economía y Finanzas había suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US\$20 millones para agilizar proyectos en las zonas con mayor índice de pobreza en el país. Así las cosas, el Proyecto de Mejoramiento de la Inversión Pública Territorial, como ha sido titulado por el ministerio, se concentrará en regiones como Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno.



Lo destacable: servirá para formar equipos técnicos multidisciplinarios con experiencia en pre-inversión, ejecución y contrataciones, que trabajarán con los funcionarios de los gobiernos regionales para desentramar la ejecución del gasto público.

Como se sabe, buena parte de lo que hoy se encuentra atorado en dicha trampa son los proyectos de infraestructura (no es casual que el BID calcule que nuestra brecha en este rubro rodee los US\$45.000 millones). Pero algo de lo que no todo el mundo es consciente es que este problema no solo afecta la competitividad del país, sino además –y de manera fundamental– la superación de la pobreza. Pruebas de ello podemos encontrar en el reciente documento de trabajo elaborado por el Banco Mundial titulado “Perú en el umbral de una nueva era”, que demuestra cómo dicha situación afecta principalmente a los más necesitados.

Cuando se compara la costa (donde se ubican los polos de mayor desarrollo) por un lado con la sierra y selva por el otro, se encuentra que existe una brecha de 20% en el acceso a los servicios de electricidad, agua y saneamiento. De hecho, en 18 regiones del país más del 10% de la población no tiene acceso a ningún servicio (las otras 7 coinciden con las más pobladas y prósperas de la costa). Y en Amazonas, Puno, Cajamarca y Huánuco esta situación afecta al 40% de las personas.

Para el caso del acceso a agua limpia, la realidad del Perú es que solo alrededor del 83% de sus ciudadanos tiene acceso a ella, cuando el promedio de América Latina y el Caribe es de 90%. La consecuencia es mucho más que una enorme incomodidad para millones, pues la incidencia de enfermedades infecciosas (y, por lo tanto, la expectativa de vida) se encuentra directamente relacionada con el acceso a agua limpia y desagüe.

Con la tasa de electrificación sucede algo similar. Según el informe del Banco Mundial, en el 2006 (último año con cifras comparables en la región) el 73% de los peruanos tenía acceso a electricidad frente al 78% de América Latina y el Caribe. El problema es especialmente grave en zonas rurales de nuestro país, donde dicha tasa no pasa del 32% de la población. Así, las familias de tales lugares tienen menos oportunidades de utilizar herramientas modernas que aumenten su productividad, gozar de mejores condiciones de vida (y hasta refrigerar la leche de sus hijos).

De la calidad vial, por otra parte, tampoco hay mucho de qué estar orgullosos: solo 6 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie son caminos, mientras que el promedio en América Latina y el Caribe es de 17 kilómetros; y el porcentaje de caminos pavimentados solo es de 18%, cuando el promedio regional es de 23%. Esto supone que a los ciudadanos de las zonas más excluidas les cuesta más comerciar sus productos, ir al trabajo o enviar a sus hijos al colegio. De alguna manera, la falta de desarrollo vial los tiene atrapados en la miseria.

Revertir esta situación tendría un impacto importante en el combate a la pobreza. Según Escobal y Torero, el ingreso de los hogares aumenta en un 13% cuando acceden a agua y electricidad, en un 23% si tienen acceso además a saneamiento y en un 36% si a eso le suman acceso a telecomunicaciones. Además, estos autores han comprobado que cuando se rehabilitan los caminos

rurales el ingreso de estas familias aumenta en un 35% por tener un mercado más grande a su alcance.

Por todo esto, desarmar la trampa en la que ha caído la infraestructura debería ser uno de los principales programas de desarrollo nacional. Y no solo por sus beneficios inmediatos para los más necesitados sino porque, además, a diferencia de los programas asistencialistas, el agua, la electricidad o los caminos sí ayudan a que la gente salga adelante por sí misma.